

► EDUCACIÓN

El sindicato Aspes considera inservibles y antipedagógicos los CEOs

Defiende que la red pública de institutos tiene plazas suficientes para recibir a todos los alumnos de Educación Secundaria

• La organización de profesores recuerda que mientras se crean centros en los pueblos que tienen dos alumnos en un aula, Segovia sigue siendo la única capital que no cuenta con una sede para la Escuela Oficial de Idiomas.

P. B. / SEGOVIA

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes) reafirmó ayer su rechazo a la implantación de Centros de Educación Obligatoria cuya construcción en los pueblos obedece "más a intereses políticos que a necesidades educativas". Así se manifestó el representante del sindicato Aspes en Segovia, Alberto Gómez Nieva, quien en una rueda de prensa aseguró que estos centros son "inservibles, antieconómicos y antipedagógicos". Gómez Nieva expuso que todos los alumnos que hay en los tres Centros de Educación Obligatoria en funcionamiento en Sepúlveda, Prádena y Villacastín así como el que está proyectado construir en Riaza "pueden ir per-

fectamente a un instituto porque hay plazas para ellos". Según Aspes en los institutos se puede dar a los alumnos una enseñanza de mayor calidad, con profesorado especializado y una adecuada oferta de asignaturas optativas. "Esto no es Siberia; aquí no hay distancias tan grandes como para crear un centro que tenga aulas con solo dos alumnos", dijo Gómez Nieva reiterando que la construcción de estos centros responde al deseo de los políticos de obtener votos en los pueblos.

El representante de Aspes en Segovia cifró en unos 10 millones de euros la inversión realizada por la Administración regional en la construcción de los CEOs, lo que le llevó a concluir que "la Junta tiene dinero para lo que quiere" y utiliza "criterios ideológicos" en su administración. En esta misma línea argumentativa consideró innecesarios los conciertos educativos, cuando la red pública de centros tiene cobertura suficiente para atender a todos los alumnos de Secundaria de Segovia, y de igual forma valoró la adquisición de miniportátiles para distribuir a los escolares, que apenas ha tenido aceptación en-



Representantes regionales y provinciales de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria. / JUAN MARTÍN

tre las familias de los alumnos.

Para Aspes resulta un agravio comparativo que la Administración regional asuma estas inversiones y tenga a los centros educativos sin presupuestos para afrontar los gastos corrientes y so-

bre todo permita que Segovia siga siendo la única capital de provincia de la Comunidad que no tenga una sede para la Escuela Oficial de Idiomas, que desde hace décadas ocupa parte de las instalaciones del instituto Mariano Quintanilla.

Acción social en defensa de los servicios públicos

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (ASPES) ha hecho un llamamiento a la acción social para que los ciudadanos defiendan en la calle los servicios públicos y no permitan que pierdan calidad.

Para esta organización la Junta de Castilla y León está "castigando a sus funcionarios" con sus medidas de recorte económico y con el incumplimiento de acuerdos alcanzados con anterioridad. También reprocha a la Administración central que ataque a los empleados públicos para afrontar una difícil situación económica cuando debería enfrentarse con firmeza al fraude fiscal y corregir la corrupción, según defendieron ayer en rueda de prensa el presidente y el secretario de Aspes de Castilla y León, Honorio Vega y Carlos Hernández, respectivamente.

"No se puede seguir llamando a las puertas de los empleados públicos para cuadrar las cuentas de la Administración", indicó Honorio Vega quien considera que en lugar de seguir utilizando a los funcionarios como "chivos expiatorios", los gobiernos deberían afrontar la reducción del sector público empresarial al que calificó como un "nido de corrupción" que sirve "para colocar amigos con sueldos astronómicos".

Honorio Vega considera necesario que se "meta la tijera de la ética" porque no es admisible que los ciudadanos vean como cada día se multiplican los casos de corrupción, mientras a ellos se les reduce la nómina y pierden servicios públicos. "Si no se toman medidas esto puede terminar en una explosión social", advirtió el presidente regional de Aspes.